

Ple de les Corts Valencianes celebrat el dia 21 de novembre de 1996. Comença la sessió a les 10 hores i 5 minuts. Presidix el Molt Excel·lent Senyor President Vicent González i Lizondo. Sessió plenària número 38. Segona i darrera reunió.

El senyor president:

Senyories, bon dia. Es reanuda la sessió en el primer punt de l'orde del dia: compareixença del president del Consell per a respondre a les preguntes d'interès general per a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris.

En primer lloc, i en representació del Grup Parlamentari Popular, te la paraula el senyor Fernando Castelló.

El senyor Castelló Boronat:

Señor presidente. Señoras y señores diputados.

Ante las noticias aparecidas hace unos días en algunos medios de comunicación sobre el incremento de personal asesor en la Presidencia del Consell, que puede trasladar ante la opinión pública una versión equivocada de la realidad y la falsa sensación de no aplicar la política de austeridad que viene practicando el gobierno, nadie mejor que el propio presidente de la Generalitat para aclarar esta cuestión. Y por este motivo le preguntamos al Molt Honorable ¿cuál es la situación en Presidencia de la Generalitat en lo que se refiere a incremento de personal asesor y el criterio del presidente sobre este asunto?

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Castelló.
Senyor president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente. Con la venia.

Señorías. Señor Castelló, en reiteradas ocasiones, desde el inicio mismo de la legislatura, he tenido que escuchar que el número de asesores de Presidencia de la Generalitat había crecido con respecto al número que existía anteriormente, incluso que el número de asesores del gobierno valenciano es superior al que había con el gobierno anterior.

Al margen, señorías, de que ese debate me entristece, me entristece que suponga una línea estratégica de alguien o que sea el eje del debate político, como en algunos casos y por desgracia ha sido, quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el Grupo Parlamentario Popular para, de la forma más solemne que se pueda y para que figure en el *Diario de Sesiones*, dejar constancia de algunos datos ciertos e incontestables.

Presidencia de la Generalitat Valenciana, en particular, y el gobierno en general, tienen menos asesores que el anterior presidente y que los gobiernos anteriores. Y eso a pesar que la situación es mucho menos favorable. ¿Por qué digo que es menos favorable la situación actual? Pues permítanme sus señorías que con la brevedad de la respuesta no me alargue, pero entenderán perfectamente que hay puestos que requieren ser de confianza que, sin embargo, el presidente anterior y los gobiernos anteriores, cubrían con personal que había accedido a los mismos y ocupaba una función o un puesto funcional. Lo que puede ser, lo que puede ser, una perversión de la administración pública y lo que dice poco en defensa y en respeto de la profesionalización de la administración pública. Con estos criterios, a mi juicio de desigualdad entre la situación anterior y la actual, les voy a dar los datos.

El número de asesores que tengo como presidente de la Generalitat es exactamente de siete, siete, incluyendo en esos siete dos personas adscritas a protocolo y una al gabinete de prensa. Luego quedan cuatro personas para realizar las funciones de asesoramiento propiamente dicho. Todas ellas, las siete, cumplen una amplia jornada laboral, a diferencia de lo que ocurría anteriormente que algunos asesores compatibilizaban su puesto de asesor con otras importantes representaciones institucionales, o incluso no tenían despacho en el Palau de la Generalitat Valenciana.

Las siete personas, la totalidad, devengan ingresos anuales por importe de 40.806.442 pesetas. Esta cifra ascendía con mi antecesor a 47.250.060 pesetas, que tenía nueve asesores. Al margen de que puestos de confianza tan importantes, como secretaría particular o jefatura de prensa, estaban ocupados por personas que al acceder a esas responsabilidades lo hicieron en condición de funcionarios para quedarse siempre en la administración pública valenciana.

El número total de asesores del gobierno en la actualidad, el total, es de 42, frente a los 63 con los que contaba el gobierno anterior; es decir, 21 menos, un 31,7% menos. Los 63 del anterior gobierno costaban 289,8 millones de pesetas anuales, frente a los 215 que cuestan actualmente, aproximadamente un poco menos del 25%.

Señorías, les aseguro que lamento este tipo de debates. Les aseguro que me entristece que este sea el eje del debate que tenga que tener muchas veces esta cámara. Pero no soy yo quien lo saca, señorías, no soy yo. Mi grupo pregunta ante reiteradas insinuaciones y manifestaciones hechas públicas por sus señorías, no solamente en los debates y en esta cámara sino a través de los medios de comunicación. No es el Grupo Popular, ni el gobierno, el que provoca este debate. Lo que no va a hacer el gobierno, y sépanlo, señorías, es callarse reiteradamente ante las acusaciones, que no son ciertas y que, además, dejan en evidencia al gobierno anterior y dejan muy bien al actual con respecto a los comportamientos y a las líneas de comportamiento político anteriores.

Es más. Digo de forma solemne y clara que todas las personas de confianza que me acompañan en el proyecto político que represento se marcharán de la administración pública conmigo cuando cesen mis responsabilidades políticas. Así de claro. Cosa que no pueden decir los gobiernos anteriores, ni mi antecesor. Porque eso es una vulneración, a mi juicio, de los principios que deben regir la administración pública. Las personas tienen que distinguirse cuando desempeñan responsabilidades en la administración en función de su eventualidad y confianza política o en función de su profesionalidad y su carrera profesional al frente de la administración. Esa distinción hay que dejarla muy clara. Y yo me comprometo firmemente a que esto sea así en mi caso. Es, además, el mayor favor que se le puede hacer a la profesionalización de la administración pública.

Es más. Si sus señorías tienen interés en ello, a mí no importaría en absoluto que pudiéramos de una vez por todas aclarar el papel que los eventuales tienen que jugar en la administración pública, de una vez por todas, para que no vayamos siempre diciendo cosas de las que después nos podemos arrepentir y que, desde luego...

El senyor president:

Senyor president.

El senyor president del Consell:

Acabo. Acabo, señor presidente.

Decía cosas que nos podamos arrepentir y que perjudiquen a la administración pública en general. Luego dejo es-

crito en el *Diario de Sesiones* y de forma –perdonen que reitero la expresión– solemne, que este gobierno es más barato y mucho más coherente con los criterios de la administración pública.

El señor president:

Muchas gracias, señor presidente.

Para formular la pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio Moreno.

El señor Moreno Carrasco:

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Señor Zaplana, ante los problemas detectados sobre la calidad de la asistencia sanitaria prestada a los enfermos que se están desviando a las clínicas privadas, le realizo la siguiente pregunta: ¿Qué controles ha establecido el Consell de la Generalitat para hacer un seguimiento del plan de choque de las llamadas listas de espera de los hospitales del sistema sanitario público valenciano?

El señor president:

Gracias, señor Moreno.

Señor presidente.

El señor president del Consell:

Con la venia del señor presidente.

Señorías.

Controles y garantías, todos y, en cualquier caso, infinitamente superiores, a través del Decreto 97/96, que regula esta cuestión, a los que se tenían anteriormente en los llamados paquetes que remitían un número de personas a la sanidad privada, también con el ánimo fundamentalmente de intentar que las listas de espera no se vieran incrementadas. Luego garantías y controles, todos los que están a disposición de la administración pública, de la sanidad pública. Y, en cualquier caso, manifestar mi satisfacción por la buena marcha que el plan de choque y la evolución de las medidas adoptadas en el decreto está teniendo.

El señor president:

Gracias, señor presidente.

Señor Moreno.

El señor Moreno Carrasco:

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados.

Señor Zaplana, mire, el plan de choque ha sido polémico desde su principio. Ustedes han optado por el camino fácil de desviar enfermos con patologías sencillas a las clínicas privadas para su intervención. Y nosotros les hemos denunciado reiteradamente que eso significa descapitalizar el sistema sanitario público a medio y largo plazo y que se podía haber optado, parece razonable que se hubiera optado, por aumentar la actividad de los hospitales públicos en lugar de disminuirla, como han hecho ustedes, como así ha reconocido un informe que ha elaborado el departamento de medicina preventiva y salud pública de la facultad de medicina de la Universidad de Valencia, en fechas recientes y que ha sido publicado el 10 de noviembre en los medios de comunicación.

Pero ustedes han cogido un sendero que yo creo que no están dispuestos a abandonar. Y por lo tanto nuestra preocupación ahora, y quiero que usted entienda hoy esta intervención en ese sentido, no en otro completamente distinto, se

centra en la calidad y en los controles que hay sobre esas intervenciones.

Porque, mire, ustedes han escogido un camino que nosotros consideramos fraudulento, que es el de reintegro de gastos. Y con un único objetivo, que es el obviar el concierto que regula la Ley de contrataciones de administraciones públicas. ¿Y por qué hacen eso? Pues, sorprendentemente, porque ahora vemos que a muchos enfermos se les trata en clínicas que antes no estaban concertadas. Y no estaban concertadas porque no reunían condiciones o porque su personal era incompatible o porque no tenían los servicios esenciales básicos, como bancos de sangre, unidad de reanimación, unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Pero ahora, sorprendentemente, ahí se están atendiendo enfermos y no sabemos si han desaparecido esos problemas. Ustedes nos lo explicarán.

Pero, en todo caso, volvamos a lo de los controles. Miren, ustedes se han empeñado, con sus números, que se los inventan y los disfrazan y cada vez dicen unos, en que se está aligerando la lista de espera. No es cierto, señor Zaplana. La lista de espera... se está taponando su entrada. Yo le puedo poner los ejemplos que quiera ante las maravillosas contestaciones del señor Farnós. Mire, por ejemplo, uno, en el hospital de Alicante, servicio de oftalmología, tienen ustedes una cifra razonable de lista de espera, 89 pacientes. Pero de primera visita tienen 2.436 pacientes para ser vistos por primera vez, que tardarán un año en ser vistos por primera vez, un año. Así es como ustedes acaban con las listas de espera, no dejan entrar pacientes para ser intervenidos y, evidentemente, las aligeran.

Ya les avisaron a ustedes, y se lo enseñaron, que otro sistema que ustedes están haciendo es amenazar al ciudadano, ya le enseñaron la carta, con su escrito. Pero es que los amenazan después de estar intervenidos. Mire, un paciente que se le interviene el 11 de mayo, en una clínica privada, remitida, de una mano, el 4 de junio y, de otra, el 27 de septiembre lo amenazan con que si no va lo retiran de la lista de espera. Ese es el control que ustedes están teniendo.

Pero es que, además, sí que nos preocupa el control de calidad, que es lo que de verdad a mí me gustaría tratar hoy. Porque hay clínicas sobre las que parece que prima la cantidad sobre la calidad; si no, no se explica que de sus contestaciones se desprenda que haya alguna clínica –y yo estoy dispuesto a dar nombres, pero es preferible no darlos– que ha facturado en seis meses 600 millones de pesetas, que significan 12.000 procesos, según su contestación. Divida usted entre tres o cuatro quirófanos a cuánto le sale por día y quirófano.

Pero no se conforman con eso, señor Zaplana. Hay pacientes que son intervenidos en la sanidad privada y se tienen que intervenir otra vez en la sanidad pública; aquí están los nombres y apellidos. Paciente que se le interviene de juanetes, en la sanidad privada, los que ustedes desvían; dos días después se le da de alta de una contusión de rodilla. Sería hasta gracioso si no fuera la salud del ciudadano. Pero es que tres meses después se gasta el dinero en un médico privado y le dice que no le han hecho absolutamente nada. Y un día después, el servicio de traumatología del hospital público le dice que, efectivamente, no le han hecho nada y que tienen que volver a operarlo. Ese es su plan de choque.

Pero, por si faltara poco, y yo aquí sí que quiero que lo tratemos esto con todo el cariño del mundo, tenemos un problema en la ciudad de Alcoy. Una ciudadana se acoge al plan de choque, se le interviene en una clínica privada de cálculos en la vesícula y tres semanas después fallece. Y este es un hecho objetivo. Y es que un ciudadano se ha aco-